

REPUBLICA ARGENTINA

# DIARIO DE SESIONES

## CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

107ª REUNIÓN — 29ª SESIÓN ORDINARIA — 9 DE DICIEMBRE DE 1997

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,  
doctor EDUARDO MENEM,

y del señor vicepresidente del Honorable Senado, doctor ANTONIO F. CAFIERO

Secretarios: doctor EDGARDO R. PIUZZI y doctora MATILDE DEL VALLE GUERRERO

Prosecretarios: señor MARIO L. PONTAQUARTO, doctor DONALDO A. DIB  
y doctor RODOLFO N. ADÉN

### PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.  
AGÚNDEZ, Jorge A.  
ALASINO, Augusto  
ALMIRÓN, Carlos H.  
AVELÍN, Alfredo  
BAUM, Daniel  
BAUZA, Eduardo  
BERHONGARAY, Antonio T.  
BRANDA, Ricardo A.  
BRAVO, Leopoldo  
CABANA, Fernando V.  
CAFIERO, Antonio F.  
CANTARERO, Emilio M.  
COSTANZO, Remo J.  
DE LA ROSA, Carlos L.  
DE LA SOTA, José M.  
FERNÁNDEZ de KIRCHNER, Cristina E.  
FERNÁNDEZ MEIJIDE, Graciela  
FIGUEROA, José O.  
GAGLIARDI, Edgardo J.  
GALVÁN, Raúl A.  
GENOUD, José  
GIOJA, José L.  
HUMADA, Julio C.  
LEÓN, Luis A.  
LÓPEZ, Alcides H.  
LOSADA, Mario A.  
LUDUENA, Felipe E.  
MAC KARTHY, César  
MAGLIETTI, Alberto  
MANFREDOTTI, Carlos  
MARANGUELLO, Pedro C.  
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.  
MASSACCESI, Horacio  
MASSAT, Jorge  
MAYA, Héctor M.

MELGAREJO, Juan I.  
MENEHINI, Javier Reynaldo  
MENEM, Eduardo  
MIRANDA, Julio  
MOREAU, Leopoldo R. G.  
OUDÍN, Ernesto R.  
OYARZÚN, Juan C.  
PRETO, Ruggero  
QUINZIO, Bernardo P.  
REUTEMANN, Carlos A.  
RIVAS, Olijela del Valle  
ROMERO FERIS, José A.  
SÁEZ, José M.  
SAGER, Hugo A.  
SALA, Osvaldo R.  
SALUM, Humberto E.  
SAN MILLÁN, Julio A.  
SAPAG, Felipe R.  
SOLANA, Jorge D.  
STORANI, Conrado H.  
TELL, Alberto M.  
ULLOA, Roberto A.  
USANDIZAGA, Horacio D.  
VAQUIR, Omar M.  
VERNA, Carlos Alberto  
VILLARROEL, Pedro G.  
VILLAVERDE, Jorge A.  
YOMA, Jorge R.  
ZALAZAR, Horacio A.

### AUSENTES, CON AVISO:

PARDO, Angel F.  
PEÑA de LÓPEZ, Ana M.

### POR ENFERMEDAD:

VACA, Eduardo P.

### POR SUSPENSIÓN:

ANGELOZ, Eduardo C.

## SUMARIO

1. Manifestaciones en minoría. (Pág. 6459.)
2. Por invitación del presidente provisional del Honorable Senado, el señor senador por el Chaco don Horacio Aníbal Zalazar, procede al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Página 6460.)
3. Consideración del diploma presentado por el señor senador electo por la provincia del Chaco, don Hugo Abel Sager. Se aprueba. (Pág. 6460.)
4. Juramento del señor senador electo por la Ciudad de Buenos Aires don Pedro del Piero. (Pág. 6460.)
5. Juramento e incorporación del señor senador electo por la provincia del Chaco don Hugo Abel Sager. (Pág. 6460.)
6. Homenaje en conmemoración del 50º aniversario de la distinción del doctor Bernardo Houssay con el premio Nobel de Medicina. Consideración de un proyecto de resolución (S.-2.434/97.) Se aprueba. (Pág. 6461.)
7. Asuntos entrados:
  - I. Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se convoca a sesiones extraordinarias al Honorable Congreso de la Nación (P.E.-792/97). (Pág. 6462.)
  - II. Comunicaciones de la Presidencia de la Nación. (Pág. 6462.)
  - III. Proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley de impuesto a las ganancias con respecto a la fecha de entrada en vigencia de varios artículos (C.D.-135/97). (Pág. 6462.)
  - IV. Proyecto de ley en revisión por el que se dispone la aplicación del presupuesto de la administración nacional para 1997 con destino a programas turísticos (C.D.-136/97). (Pág. 6462.)
  - V. Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 6463.)
  - VI. Comunicaciones de comisiones. (Página 6463.)
  - VII. Comunicaciones oficiales. (Pág. 6463.)
  - VIII. Dictámenes de comisiones. (Pág. 6464.)
  - IX. Peticiones particulares. (Pág. 6466.)
  - X. Proyecto de declaración del señor senador Romero Feris por el que se establece la inclusión del servicio de Internet dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de prensa (S.-2.402/97). (Pág. 6466.)
  - XI. Proyecto de comunicación del señor senador Usandizaga por el que se solicitan informes acerca de los criterios para la

medición del contenido de piezas importadas por terminales automotrices (S.-2.403/97). (Pág. 6467.)

- XII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes acerca del financiamiento diferencial de bancos brasileños para exportación de carrocerías a la Argentina (S.-2.404/97). (Pág. 6468.)
- XIII. Proyecto de comunicación del señor senador Humada por el que se solicita la instrumentación de una política sanitaria para la prevención, tratamiento y erradicación de una nueva variedad de tuberculosis resistente a múltiples drogas (S.-2.405/97). (Pág. 6468.)
- XIV. Proyecto de comunicación del señor senador Usandizaga por el que se solicitan informes acerca de la aplicación de una cláusula de salvaguardia para la importación de carrocerías de ómnibus de media y larga distancia (S.-2.406/97). (Página 6469.)
- XV. Proyecto de declaración del señor senador Berhongaray por el que se expresa reconocimiento a la labor de la Escuela Nacional de Náutica en el 198º aniversario de su creación (S.-2.407/97). (Página 6469.)
- XVI. Proyecto de comunicación de los señores senadores Caffero y Martínez Almudevar por el que se solicitan informes acerca de la firma de documentos de ratificación del acuerdo de cooperación entre la Argentina y el Euroatom (S.-2.410/97). (Pág. 6470.)
- XVII. Proyecto de ley de los señores senadores Sala y Mac Karthy por el que se transfiere a título gratuito un inmueble del Estado nacional a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Chubut (S.-2.411/97). (Pág. 6470.)
- XVIII. Proyecto de resolución del señor senador Cantarero y otros señores senadores por el que se declara de interés cultural para el Honorable Senado la labor del conjunto salteño "Los Chalchaleros" (S.-2.411/97). (Pág. 6471.)
- XIX. Proyecto de declaración del señor senador Yoma y otros señores senadores por el que se manifiesta preocupación por un proyecto de ley que se encuentra en trámite en la Legislatura de Río Negro sobre designación de senadores nacionales titulares y suplentes (S.-2.414/97). (Pág. 6472.)
- XX. Proyecto de ley de los señores senadores Fernández Meijide y Losada por el que se deroga el régimen legal sobre repre-

plenipotenciario de segunda clase (Categoría "C") a don José Carlos Díaz (P.E.-913/96). Se aprueba. (Pág. 6500.)

28. Consideración del dictamen de la comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como ministro plenipotenciario de segunda clase (Categoría "C") a don Raúl Hipólito Guerrero (P.E.-914/96). Se aprueba. (Pág. 6501.)

29. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se autoriza al jefe de Gabinete de Ministros a realizar ampliaciones en créditos presupuestarios (C.D.-130/97). Se aprueba. (Pág. 6501.)

30. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley 24.885, modificatoria del impuesto a las ganancias (C.D.-135/97). Se aprueba. (Pág. 6513.)

31. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se amplía el presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 1997, con destino a programas turísticos (C.D.-136/97). Se aprueba. (Pág. 6514.)

32. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se prorroga la vigencia del impuesto a las ganancias (C.D.-128/97). Se aprueba. (Página 6515.)

33. Manifestaciones de varios señores senadores acerca de un proyecto de ley sobre modificación del impuesto al valor agregado. (Pág. 6523.)

34. A moción del señor senador Gagliardi se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley de impuesto al valor agregado. (C.D.-129/97). (Pág. 6525.)

35. Manifestaciones de varios señores senadores acerca del tratamiento de diversos proyectos. (Pág. 6525.)

36. Consideración de las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley en revisión sobre transporte multimodal (S.-23/96). Se aprueban. (Pág. 6526.)

37. Manifestaciones de varios señores senadores acerca de un proyecto de comunicación del señor senador Avelín. (Pág. 6531.)

38. Consideración del dictamen de las comisiones de Pesca, Intereses Marítimos y Portuarios y de Ecología y Desarrollo Humano en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley en revisión por el que se establece un régimen federal de pesca (S.-27 y S.-1.125/96). Se aprueba. (Pág. 6535.)

39. Consideración del dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Comercio en el proyecto de ley en revisión sobre modificación del Programa Nacional de Prevención y Lucha

contra el tabaquismo (C.D.-109/96). Se aprueba. (Pág. 6531.)

40. A moción del señor senador Branda se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación del señor senador Avelín por el que se solicita se dote de una ambulancia a la localidad de El Encón, San Juan (S.-2.397/97). (Pág. 6557.)

41. A moción del señor senador Genoud comienza la consideración sobre tablas de las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley en revisión sobre constitución del Consejo de la Magistratura (S.-1.689/94; 580, 670, 712, 737, 913, 829, 1.078, 1.270/95, P.-109 y 266/95). Se pasa a sesión extraordinaria. (Pág. 6568.)

42. Apéndice:

I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 6576.)

II. Inserciones. (Pág. 6587.)

—En Buenos Aires, a las 17 y 10 del martes 9 de diciembre de 1997:

## I

### MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Avelín. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Para formular manifestaciones en minoría, tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Avelín. — Señor, presidente: habíamos acordado iniciar la sesión a las 16 y ya son más de las 17.

Creo que vale la pena establecer un lapso luego del cual, de considerarlo pertinente la Presidencia, se debería pasar lista. De existir quórum, estaríamos en condiciones de comenzar la sesión.

Sr. Presidente (Menem). — Así se hará, señor senador.

Vamos a llamar por diez minutos más y, si no hay quórum, procederé a levantar la sesión.

—Se continúa llamando.

—A las 17 y 26:

Sr. Avelín. — Señor presidente...

Sr. Presidente (Menem). — Ya vamos a empezar a tomar lista, señor senador.

Sr. Avelín. — Gracias, señor presidente.

—Se continúa llamando.

—Luego de unos minutos:

Sr. Branda. — Ya hay quórum, señor presidente.

—A las 17 y 31:

Sr. Presidente (Menem). — Queda abierta la sesión.

**Sr. Presidente (Menem).** — Le reitero que está incluido en el plan de labor.

**Sr. Avelín.** — ¡Quiero que lo tratemos ya!

**Sr. Presidente (Menem).** — El señor senador por San Juan está solicitando la modificación del plan de labor para tratar el proyecto...

**Sr. Avelín.** — ¡No es el cambio, señor presidente! Habíamos quedado en la reunión de labor parlamentaria en que este proyecto sería tratado ahora.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se trata de una modificación al plan de labor, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Alasino.** — Señor presidente: habíamos acordado el tratamiento sobre tablas de este proyecto en primer término, pero al entrar en la parte de los asuntos con tratamiento sobre tablas acordado.

En consecuencia, y conforme con lo que recientemente hemos acordado, deberíamos pasar ahora al tratamiento del proyecto de ley de pesca, para luego considerar el proyecto de ley antitabáquica y finalmente el proyecto de ley que reglamenta el Consejo de la Magistratura.

No obstante, si existe acuerdo, propongo que dejemos de lado el tratamiento de las órdenes del día y consideremos ahora el proyecto del señor senador Avelín.

**Sr. Presidente (Menem).** — En consideración la moción de modificación del plan de labor formulada por el señor senador por San Juan.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta negativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Queda rechazada.

**Sr. Avelín.** — Le agradezco, señor presidente. ¡Ojalá que nunca le pase nada!

**Sr. Presidente (Menem).** — ¿Se está refiriendo a mi persona, señor senador?

**Sr. Avelín.** — No, señor.

**Sr. Presidente (Menem).** — ¡Ah! Porque la decisión fue puesta a consideración del cuerpo y ha sido la Cámara quien ha votado. No es el presidente quien decide, señor senador.

**Sr. Avelín.** — Le agradezco lo mismo, señor presidente.

38

## GIMEN FEDERAL DE PESCA

**Sr. Pres. (Menem).** — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Pesca,

Intereses Marítimos y Portuarios y de Ecología y Desarrollo Humano en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera enviado en revisión por el que se establece un régimen federal de pesca. (Orden del Día N° 1.260.)

Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario (Piuze).** — (Lee)

### Dictamen de comisión

#### Honorable Senado

Vuestras comisiones de Pesca, Intereses Marítimos y Portuarios y de Ecología y Desarrollo Humano, han considerado el proyecto de ley federal de pesca (expedientes 27/96 y 1.125/96) remitido por la Cámara de Diputados de la Nación con correcciones a la sanción efectuada por este cuerpo y por las razones que os dará el señor miembro informante os aconsejan:

a) Insistir en la redacción de los artículos 3° y 5° conforme fueran sancionados por el Honorable Senado de la Nación;

b) Aceptar las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados a los restantes artículos del proyecto;

c) Insistir en la sanción de los artículos 42 y 65 del proyecto original de este cuerpo, los que se incorporarán con los números 73 y 74 al texto ordenado que se acompaña por separado.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 120 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 2 de diciembre de 1997.

Oswaldo R. Sala. — Antonio Cañero. —  
José M. Sáez. — Juan I. Melgarejo. —  
Ruggero Preto. — Carlos L. de la Rosa. —  
César Mac Karthy. — José Genoud. —  
Remo J. Costanzo. — José L. Gloja. —  
Enrique Martínez Almudevar. — Fernando V. Cabana. — Humberto E. Salum. — Horacio A. Zalazar. — Ricardo A. Branda. — Edgardo J. Cagliardi. — Mario A. Losada.

### Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(19 de noviembre de 1997)

#### PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...

### Régimen Federal de Pesca

#### Capítulo I

#### Disposiciones generales

Artículo 1° — La Nación Argentina fomentará el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos. Promoverá la protección efectiva

de los intereses nacionales relacionados con la pesca y promocionará la sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando la conservación a largo plazo de los recursos, favoreciendo el desarrollo de procesos industriales ambientalmente apropiados que promuevan la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina.

Art. 2º — La pesca y el procesamiento de los recursos vivos marinos constituyen una actividad industrial y se regulará con sujeción al Régimen Federal de Pesca Marítima que se establece en la presente ley.

## Capítulo II

### *Dominio y jurisdicción*

Art. 3º — Son del dominio de las provincias con litoral marítimo los recursos vivos que poblaren las aguas interiores y el mar territorial argentino adyacente a sus costas, hasta las doce (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas mediante ley 23.968, las que ejercerán su jurisdicción a los fines de su exploración, explotación, conservación y administración de los recursos vivos marinos conforme a la política pesquera establecida por el Consejo Federal Pesquero.

Cuando se determinen políticas para la explotación de los recursos vivos en las aguas interiores, el Consejo Federal Pesquero deberá priorizar los intereses regionales de cada provincia y contar con la debida autorización de las autoridades de las mismas.

Art. 4º — Son de dominio y jurisdicción exclusivos de la Nación, los recursos vivos marinos existentes en las aguas de la zona económica exclusiva argentina y en la plataforma continental argentina a partir de las doce (12) millas indicadas en el artículo anterior.

La República Argentina, en su condición de Estado ribereño, podrá adoptar medidas de conservación en la zona económica exclusiva y en el área adyacente a ella sobre los recursos transzonales y altamente migratorios, o que pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la zona económica exclusiva argentina.

## Capítulo III

### *Ámbito de aplicación*

Art. 5º — El ámbito de aplicación de esta ley comprende:

- a) La regulación de la pesca en el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental argentina determinados por la ley 23.968, incluyendo la franja de jurisdicción exclusiva argentina adyacente a la costa del Río de la Plata a que alude el artículo 2º del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, aprobado por ley 20.645, y las zonas marítimas que en el futuro la Nación Argentina declare de jurisdicción nacional en ejercicio de su derecho soberano;
- b) La coordinación de la protección y administración de los recursos vivos marinos que se encuentran tanto en el mar territorial como en la zona económica exclusiva;
- c) La regulación de la pesca en la zona adyacente a la zona económica exclusiva argentina respecto

de los recursos transzonales y altamente migratorios, o que pertenezcan a una misma población o a poblaciones asociadas a las de la zona económica exclusiva argentina;

- d) La regulación de las actividades pesqueras de procesamiento y transformación, almacenamiento, transporte y comercialización de productos pesqueros.

## Capítulo IV

### *Autoridad de aplicación*

Art. 6º — Créase la Secretaría de Pesca, dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, quien será la autoridad de aplicación de esta ley. Corresponderá al Poder Ejecutivo nacional adecuar las normas que regulen el funcionamiento de los organismos con competencia en materia pesquera a las disposiciones de la presente ley.

Art. 7º — Serán funciones de la autoridad de aplicación:

- a) Conducir y ejecutar la política pesquera nacional, regulando la explotación, fiscalización e investigación;
- b) Conducir y ejecutar los objetivos y requerimientos relativos a las investigaciones científicas y técnicas de los recursos pesqueros;
- c) Fiscalizar las capturas máximas permisibles por especie, establecidas por el Consejo Federal Pesquero y emitir las cuotas de captura anual por buques, por especies, por zonas de pesca y por tipo de flota, conforme las otorgue el Consejo Federal Pesquero;
- d) Emitir los permisos de pesca, previa autorización del Consejo Federal Pesquero;
- e) Calcular los excedentes disponibles y establecer, previa aprobación del Consejo Federal Pesquero las restricciones en cuanto a áreas o épocas de veda;
- f) Establecer, previa aprobación del Consejo Federal Pesquero, los requisitos y condiciones que deben cumplir los buques y empresas pesqueras para desarrollar la actividad pesquera;
- g) Establecer los métodos y técnicas de captura, así como también los equipos y artes de pesca de uso prohibido, con el asesoramiento del INIDEP y de acuerdo con la política pesquera establecida por el Consejo Federal Pesquero;
- h) Aplicar sanciones, conforme el régimen de infracciones, y crear un registro de antecedentes de infractores a las disposiciones de la presente ley, informando de las mismas al Consejo Federal Pesquero;
- i) Elaborar y/o desarrollar sistemas de estadística de la actividad pesquera;
- j) Intervenir en negociaciones bilaterales o multilaterales internacionales relacionadas con la actividad pesquera conforme la política pesquera nacional;
- k) Reglamentar el funcionamiento del registro de pesca creado por esta ley;

- l) Percibir los derechos de extracción establecidos por el Consejo Federal Pesquero;
- m) Intervenir en el otorgamiento de los beneficios provenientes de la promoción sectorial concedida o a conceder al sector pesquero;
- n) Intervenir en los proyectos de inversión que cuenten o requieran de financiamiento específico proveniente de organismos financieros internacionales y/o que hayan sido otorgados o a otorgar a la República Argentina, conforme a los criterios que determine conjuntamente con el Consejo Federal Pesquero;
- ñ) Emitir autorizaciones para pesca experimental, previa aprobación del Consejo Federal Pesquero;
- o) Establecer e implementar los sistemas de control necesarios y suficientes de modo de determinar fehacientemente las capturas en el mar territorial y la zona económica exclusiva y desembarcadas en puertos argentinos habilitados y el cumplimiento y veracidad de las declaraciones juradas de captura;
- p) Realizar campañas nacionales de promoción para el consumo de recursos vivos del mar y misiones al exterior para promover la comercialización de productos de la industria pesquera nacional;
- q) Ejercer todas las facultades y atribuciones que se le confieren por esta ley a la autoridad de aplicación.

### Capítulo V

#### Consejo Federal Pesquero

Art. 8º. — Créase el Consejo Federal Pesquero, el que estará integrado por:

- a) Un representante por cada una de las provincias con litoral marítimo;
- b) El secretario de Pesca;
- c) Un representante por la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable;
- d) Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto;
- e) Dos representantes designados por el Poder Ejecutivo nacional.

La presidencia será ejercida por el secretario de Pesca. Todos los miembros del Consejo tendrán un solo voto. Las resoluciones se adoptarán por mayoría calificada.

Art. 9º. — Serán funciones del Consejo Federal Pesquero:

- a) Establecer la política pesquera nacional;
- b) Establecer la política de investigación pesquera;
- c) Establecer la captura máxima permisible por especie; teniendo en cuenta el rendimiento máximo sustentable de cada una de ellas, según datos proporcionados por el INIDEP. Además establecer las cuotas de captura anual por buque, por especie, por zona de pesca y por tipo de flota;
- d) Aprobar los permisos de pesca comercial y experimental;
- e) Asesorar a la autoridad de aplicación en materia de negociaciones internacionales;
- f) Planificar el desarrollo pesquero nacional;

g) Fijar las pautas de coparticipación en el Fondo Nacional Pesquero (FONAPE);

h) Dictaminar sobre pesca experimental;

i) Establecer derechos de extracción y fijar cañones por el ejercicio de la pesca;

j) Modificar los porcentajes de distribución del FONAPE establecidos en el inciso c) del artículo 45 de la presente ley;

k) Reglamentar el ejercicio de la pesca artesanal estableciendo una reserva de cuota de pesca de las diferentes especies para ser asignadas a este sector;

l) Establecer los temas a consideración del Consejo Federal Pesquero que requieran mayoría calificada en la votación de sus integrantes;

m) Dictar su propia reglamentación de funcionamiento, debiendo ser aprobado con el voto afirmativo de las dos terceras partes del total de sus miembros.

Art. 10. — En el ámbito del Consejo Federal Pesquero funcionará una comisión asesora honoraria integrada por representantes de las distintas asociaciones gremiales empresarias y de trabajadores de la actividad pesquera, según lo reglamente el mismo.

### Capítulo VI

#### Investigación

Art. 11. — El Consejo Federal Pesquero establecerá los objetivos, políticas y requerimientos de las investigaciones científicas y técnicas referidas a los recursos vivos marinos, correspondiendo al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero —INIDEP—, la planificación y ejecución de sus actividades científicas y técnicas con las provincias y otros organismos o entidades, especialmente en lo que se refiere a la evaluación y conservación de los recursos vivos marinos. El INIDEP cooperará con los organismos nacionales y provinciales en las tareas de investigación tendientes a evitar la contaminación.

Art. 12. — El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero —INIDEP—, administrará y dispondrá de los buques de investigación pesquera de propiedad del Estado nacional, conforme a los requerimientos y políticas que oportunamente se establezcan, debiendo determinar anualmente el rendimiento máximo sostenible de las especies.

Art. 13. — Los resultados de todo trabajo de investigación sobre los recursos pesqueros deben estar puestos a disposición de la autoridad de aplicación antes de cualquier utilización o divulgación de los mismos.

Las empresas dedicadas a la extracción de recursos vivos marinos están obligadas a suministrar toda la información requerida destinada a la investigación del recurso.

Art. 14. — La pesca experimental por parte de personas físicas o jurídicas nacionales, extranjeras u organismos internacionales con buques de pabellón nacional o extranjero, requerirá autorización otorgada por la autoridad de aplicación, previo dictamen favorable del Consejo Federal Pesquero.

La autoridad de aplicación tendrá libre acceso a toda información derivada de la investigación científica y técnica y tendrá facultad para designar representantes del

INIDEP que, con el carácter de observadores, presenten los trabajos y verifiquen quiénes se ajusten a las condiciones y límites que se fijen.

Art. 15. — La pesca experimental sólo podrá tener un fin de investigación científica o técnica, y en ningún caso podrá tratarse de operaciones comerciales. El armador podrá disponer libremente de la captura, con las limitaciones impuestas por la autoridad de aplicación.

La autoridad de aplicación demás establecida en cada caso plazos y cupos máximos de captura acorde con la finalidad científica o técnica previo dictamen del INIDEP.

Art. 16. — Cuando esta actividad sea desarrollada por el INIDEP, CONICET y/o universidades nacionales o provinciales estatales, los productos pesqueros obtenidos durante el desarrollo de las mismas podrán disponerse en las condiciones que establezca la autoridad de aplicación.

## Capítulo VII

### *Conservación, protección y administración de los recursos vivos marinos.*

Art. 17. — La pesca en todos los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina, estará sujeta a las restricciones que establezca el Consejo Federal Pesquero con fundamento en la conservación de los recursos, con el objeto de evitar excesos de explotación y prevenir efectos dañinos sobre el entorno y la unidad del sistema ecológico.

Art. 18. — El Consejo Federal Pesquero establecerá anualmente la captura máxima permisible por especie, conforme a lo estipulado en el artículo 9º, inciso c).

Art. 19. — Según lo prescrito en el artículo 7º, inciso c) de esta ley, la autoridad de aplicación podrá establecer zonas o épocas de veda. La información pertinente a la imposición de tales restricciones, así como su levantamiento será objeto de amplia difusión y con la debida antelación comunicada a los permisionarios pesqueros y las autoridades competentes de patrullaje y control. Asimismo, podrá establecer reservas y delimitación de áreas de pesca imponiendo a los permisionarios la obligación de suministrar bajo declaración jurada, información estadística de las capturas obtenidas, esfuerzo de pesca y posición de sus buques.

Art. 20. — Los organismos competentes, para contribuir al cumplimiento de la legislación nacional sobre pesca, coordinados por la autoridad de aplicación, asegurarán la debida vigilancia y control en todo lo que respecta a la operatoria de buques pesqueros y a la explotación de los recursos vivos marinos en los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina. Con este mismo fin, la autoridad de aplicación podrá adquirir y operar los medios que resulten necesarios.

Art. 21. — La autoridad de aplicación determinará los métodos y técnicas, equipos y artes de pesca prohibidos. Quedan especialmente prohibidos en todos los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina, los siguientes actos:

- a) El uso de explosivos de cualquier naturaleza;
- b) El empleo de equipos acústicos y sustancias nocivas como métodos de aprehensión;

- c) Llevar a bordo y/o utilizar artes de pesca prohibidos;
- d) Transportar explosivos o sustancias tóxicas en las embarcaciones;
- e) Arrojar a las aguas sustancias o detritos que puedan causar daño a la flora y fauna acuáticas o impedir el desplazamiento de los peces en sus migraciones naturales;
- f) Interceptar peces en los cursos de agua mediante instalaciones, atajos u otros procedimientos que atenten contra la conservación de la flora y fauna acuáticas;
- g) Toda práctica o actos de pesca que causen estragos, sobrepesca o depredación de los recursos vivos del medio acuático;
- h) El ejercicio de actividades pesqueras sin permiso, asignación de cuota correspondiente, así como en contravención a la normativa legal vigente;
- i) El ejercicio de actividades pesqueras en áreas o épocas de veda;
- j) La introducción de flora y fauna acuáticas exóticas sin autorización previa de la autoridad competente;
- k) La introducción de especies vivas que se declaren perjudiciales para los recursos pesqueros;
- l) La utilización de mallas mínimas en las redes de arrastre, que en función por tipo de buques, maniobras de pesca y especies, no sean las establecidas para las capturas;
- m) Arrojar descartes y desechos al mar, en contra de las prácticas de pesca responsables;
- n) Realizar capturas de ejemplares de especies de talla inferior a la establecida por la normativa legal vigente o declarar volúmenes de captura distintos a los reales, así como falsear la declaración de las especies;
- ñ) Superar la captura permitida por encima del volumen de la cuota individual de captura;
- o) Realizar, toda práctica que atente contra la sustentabilidad del recurso pesquero y contra las prácticas de pesca responsable, de acuerdo con lo que determine la autoridad de aplicación en consenso con el Consejo Federal Pesquero.

Art. 22. — Con el fin de proteger los derechos preferentes que le corresponden a la Nación en su condición de Estado ribereño, la autoridad de aplicación, juntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, deberá organizar y mantener un sistema de regulación de la pesca en la zona adyacente a la zona económica exclusiva argentina, respecto de los recursos migratorios o que pertenezcan a una misma población o poblaciones de especies asociadas a las de la zona económica exclusiva argentina.

Con este fin la República Argentina acordará con los Estados que deseen pescar esas poblaciones, en la mencionada área adyacente, las medidas necesarias para racionalizar la explotación y asegurar la conservación de los recursos.

Cuando se establezcan limitaciones a la pesca o vedas, las mismas se harán extensivas a los acuerdos realizados con terceros países.



Capítulo VIII  
Régimen de Pesca

Art. 23. — Para el ejercicio de la actividad pesquera, deberá contarse con la habilitación otorgada por la autoridad de aplicación según lo estipulado en los artículos 7º y 9º de la presente ley, mediante alguno de los actos administrativos enumerados a continuación:

- a) Permiso de pesca: que habilita para el ejercicio de la pesca comercial a buques de bandera nacional, para extraer recursos vivos marinos en los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina;
- b) Permiso de pesca de gran altura: que habilita a buques de pabellón nacional para el ejercicio de la pesca comercial, sobre el talud continental, fuera de la zona económica exclusiva, alta mar o con licencia en aguas de terceros países;
- c) Permiso temporario de pesca: serán otorgados a buques arrendados a casco desnudo en las condiciones y plazos establecidos en la presente ley. El mismo tratamiento se aplicará para los buques de pabellón extranjero que operen en las condiciones de excepción establecidas por esta ley;
- d) Autorización de pesca: que habilita para la captura de recursos vivos marinos en cantidad limitada, para fines de investigación científica o técnica.

Art. 24. — La explotación de los recursos vivos marinos en los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina, sólo podrá ser realizada por personas físicas domiciliadas en el país, o jurídicas de derecho privado que estén constituidas y funcionen de acuerdo con las leyes nacionales. Los buques empleados en la actividad pesquera deberán estar inscritos en la matrícula nacional y enarbolar el pabellón nacional.

Art. 25. — Será obligatorio desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos. En casos de fuerza mayor debidamente acreditado o cuando los buques se encuentren autorizados a operar en aguas internacionales, la autoridad de aplicación podrá autorizar la descarga en puertos extranjeros y el transbordo en los puertos argentinos o en zonas de desembarque habilitadas en las radas de los mismos.

Art. 26. — Los permisos de pesca serán otorgados según lo estipulado por los artículos 7º y 9º de esta ley, en las condiciones siguientes:

1. Por un plazo de hasta diez (10) años, para un buque determinado.

El Consejo Federal Pesquero establecerá las condiciones, debiendo priorizar a tal efecto:

- a) Los buques que empleen mano de obra argentina en mayor porcentaje;
- b) Los buques construidos en el país;
- c) Menor antigüedad del buque.

2. Por un plazo de hasta treinta (30) años para un buque determinado, perteneciente a una empresa con instalaciones de procesamiento radicadas en el territorio nacional y que procesen y elaboren en ellas productos pesqueros en forma continuada.

El Consejo Federal Pesquero establecerá las condiciones, debiendo priorizar a tal efecto:

- a) Que empleen mano de obra argentina en mayor porcentaje, en tierra y buques en forma proporcional;
- b) Que agreguen mayor valor al producto final;
- c) Los buques construidos en el país;
- d) Menor antigüedad del buque.

3. A los efectos del otorgamiento de los permisos previstos en los incisos 1 y 2 del presente artículo, las empresas titulares de los buques, deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones legales, provisionales e impositivas vigentes.

Art. 27. — A partir de la vigencia de esta ley se asignará una cuota de captura a cada permiso de pesca, tanto a los preexistentes como a los que se otorguen en el futuro.

Facúltase al Consejo Federal Pesquero para que reglamente y dicte todas las normas necesarias para establecer un régimen de administración de los recursos pesqueros mediante el otorgamiento de cuotas de captura por especies, por buque, zonas de pesca y tipo de flota.

Las cuotas de captura serán concesiones temporales que no podrán superar por empresa o grupo empresario aquel porcentaje que fijará el Consejo Federal Pesquero sobre la captura máxima permisible por especie a efectos de evitar concentraciones monopólicas indeseadas.

Para establecer los parámetros de funcionamiento del régimen de administración pesquera y la asignación de las cuotas de captura, el Consejo Federal Pesquero deberá priorizar los ítem siguientes:

1. Cantidad de mano de obra nacional ocupada.
2. Inversiones efectivamente realizadas en el país.

3. El promedio de toneladas de captura legal de cada especie efectuado durante los últimos ocho (8) años, medido hasta el 31 de diciembre de 1996, por buque o por grupo de buques si éstos pertenecieran a la misma empresa o grupo empresario.

4. El promedio de toneladas de productos pesqueros elaborados, a bordo o en tierra, de cada especie en los últimos ocho (8) años, medido hasta el 31 de diciembre de 1996, por buque o por grupo de buques si éstos pertenecieran a la misma empresa o grupo empresario.

5. La falta de antecedentes de sanciones aplicadas por infracción a las leyes, decretos o resoluciones regulatorias de la actividad pesquera.

Las cuotas de captura serán total o parcialmente transferibles de conformidad con las condiciones que establezca el Consejo Federal Pesquero que establecerá un derecho de transferencia a cargo del cesionario, en relación al volumen de captura y valor de la especie que la cuota autoriza. No se permitirá la transferencia de cuotas de capturas de buques pesqueros fresqueros a congeladores o factorías.

El Consejo Federal Pesquero podrá reservar parte de la captura máxima permisible como método de conservación y administración, priorizando su asignación hacia sectores de máximo interés social.



Art. 28. — Los permisos de pesca son habilitaciones otorgadas a los buques solamente para acceder al caladero, siendo necesario para ejercer la pesca contar con una cuota de captura asignada o una autorización de captura en el caso de que la especie no esté cuotificada.

Los permisos o autorizaciones de pesca otorgados a buques pertenecientes a empresas o grupos empresarios a quienes se les dicte la sentencia de quiebra o hubiesen permanecido sin operar comercialmente durante ciento ochenta (180) días consecutivos, sin ningún justificativo de acuerdo con lo que establezca el Consejo Federal Pesquero, caducarán automáticamente.

Los permisos o autorizaciones de pesca asignados a buques que se hundieran o ya estuvieran hundidos, o que hubieren sido afectados por otro tipo de siniestros que significó el impedimento para desarrollar su operatividad y no hubieran cumplido con el reemplazo del buque siniestrado dentro de los plazos otorgados por la autoridad de aplicación, caducarán automáticamente.

Art. 29. — El ejercicio de la pesca de los recursos vivos en los espacios marítimos, bajo jurisdicción argentina, estará sujeto al pago de un derecho único de extracción por especie y modalidad de pesca, el que será establecido por el Consejo Federal Pesquero.

Art. 30. — El permiso de pesca sólo podrá ser transferido a otra unidad o unidades de capacidad equivalente, que no impliquen un incremento del esfuerzo pesquero cuando ésta o éstas reemplacen a la primera por siniestro, razones de fuerza mayor o cuando hubiera llegado al límite de su vida útil, previa autorización de la autoridad de aplicación.

Art. 31. — En ningún caso podrá disponerse de los productos de la pesca sin someterlos previamente al control sanitario de los organismos competentes, el que deberá ejercerse sin entorpecer la operatoria pesquera, en las condiciones que establezca la reglamentación. La autoridad de aplicación reglamentará el transporte y la documentación necesaria para el tránsito de productos pesqueros.

Art. 32. — Durante la vigencia del permiso de pesca, sus titulares deberán comunicar con carácter de declaración jurada las capturas obtenidas en la forma y oportunidad que establezca la reglamentación respectiva. La falsedad de estas declaraciones juradas será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de esta ley.

Art. 33. — La autoridad de aplicación podrá decidir la instalación de artefactos en los buques para efectuar el seguimiento satelital de los mismos y los armadores pesqueros deberán cuidar y mantener dichos artefactos en perfecto estado de funcionamiento. Las infracciones cometidas con respecto a este punto, serán sancionadas conforme lo establecido por el artículo 51 de esta ley.

Art. 34. — La aprobación por la autoridad de aplicación de los proyectos que contemplen la incorporación definitiva de nuevos buques a la flota pesquera nacional tendrá eficacia para obtener el permiso de pesca respectivo siempre que la adquisición, construcción o importación se realice dentro del plazo otorgado al efecto, el que será improrrogable. La construcción o importación de buques sin contar con la aprobación previa del proyecto, será por exclusiva cuenta y riesgo del astillero, armador o del importador interviniente.

## Capítulo IX

### Excepciones a la reserva de pabellón nacional

Art. 35. — La explotación comercial de los recursos vivos marinos existentes en los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina sólo podrá realizarse mediante la pesca efectuada por buques de bandera argentina, salvo las excepciones establecidas por este capítulo. La reserva de bandera a los fines de la pesca comercial será irrenunciable dentro de las aguas interiores y el mar territorial.

Art. 36. — Las empresas nacionales que desarrollen habitualmente operaciones de pesca y tuvieran actividad ininterrumpida en el sector durante los últimos cinco (5) años anteriores a la solicitud, podrán tocar en forma individual o asociada, previa autorización del Consejo Federal Pesquero, buques de matrícula extranjera a casco desnudo, cuya antigüedad no supere los cinco (5) años y por un plazo determinado, el que no podrá exceder los 36 meses destinados a la captura de excedentes de especies inexploradas o subexploradas, de forma tal de no afectar las reservas de pesca establecidas.

Para la distribución de la cuota se seguirán los mismos criterios establecidos en el artículo 27. La inscripción de los contratos y el asiento respectivo se harán en un registro especial que tendrá a su cargo la Prefectura Naval Argentina, sin perjuicio de la fiscalización y control a cargo de la autoridad de aplicación.

Estos buques quedarán sujetos al cumplimiento de todas las normas marítimas y laborales vigentes relativas a la navegación y empleo a bordo, establecidas para los buques nacionales.

### Tratados Internacionales de Pesca

Art. 37. — El Estado nacional podrá permitir el acceso a la pesca en los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina a buques de bandera extranjera, mediante tratados internacionales aprobados por ley del Congreso Nacional que tengan por objeto la captura de especies no explotadas o subexplotadas y que contemplen:

- a) La apertura de mercado en el país co-contratante con cupos de importación de productos pesqueros argentinos libres de aranceles de importación por un valor económico similar al del cupo de pesca otorgado en los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina;
- b) La conservación de los recursos en el área adyacente a la zona económica exclusiva argentina;
- c) El derecho de nuestra flota a pescar en el área adyacente a la zona económica exclusiva del país co-contratante.

La determinación de la capacidad de captura de la flota argentina a efectos del cálculo de los excedentes, sólo podrá hacerse atendiendo a razones estructurales biológicas y no a mermas cíclicas propias de la actividad ni a hechos extraordinarios de alcance general que hayan afectado su operatividad.

Art. 38. — La concesión de cupos de pesca para ser capturados por buques de bandera extranjera en función de los tratados internacionales mencionados en el artículo anterior no deberá afectar las reservas de pesca impuestas en favor de embarcaciones nacionales y que-

dará sujeta en todos los casos al cumplimiento de las condiciones siguientes:

- a) Se otorgará por tiempo determinado;
- b) La actividad de los buques extranjeros se ajustará a las normas de esta ley y sólo será admitida cuando ésta se realice en forma conjunta con una o más empresas radicadas en el país, conforme a la ley de sociedades;
- c) Se autorizará por áreas de mar y pesquerías delimitadas geográficamente y con relación a las especies que se determinen para cada caso;
- d) La autoridad de aplicación regulará las temporadas y zonas de pesca, el tipo, tamaño y cantidad de aparejos y la cantidad, tamaño y tipo de buques pesqueros que puedan usarse;
- e) La autoridad de aplicación fijará la edad y el tamaño de los recursos vivos marinos a capturar;
- f) Los buques deberán descargar sus capturas en muelles argentinos, ya sea para efectuar transbordo a otros buques o en tránsito para su reembarque;
- g) Estos buques quedarán sujetos al cumplimiento de todas las ordenanzas marítimas y normas laborales vigentes relativas a la navegación establecidas para buques nacionales en cuanto fuere aplicable;
- h) Las empresas que se conformen como resultado de la aplicación del inciso b) de este artículo, deberán inscribirse en el registro que se cree a tal efecto, al igual que los buques, las tripulaciones afectadas y los convenios particulares que se suscriban;
- i) Estos buques abonarán el canon de extracción que para cada caso determine la autoridad competente;
- j) Los armadores de los buques extranjeros deberán facilitar a bordo de cada buque las comodidades adecuadas para el personal de fiscalización y de investigación cuyo embarque determine la autoridad de aplicación;
- k) La producción de estos buques deberá ser absorbida a precios internacionales por el mercado correspondiente al país de origen de las empresas autorizadas, con compromiso de no reexportación, excepto cuando se ofrezca la penetración en mercados nuevos o en aquellos que tengan restricciones para la exportación pesquera argentina;
- l) Deberán embarcar en forma efectiva como mínimo un 50% de tripulantes argentinos;
- m) La autoridad de aplicación reglamentará las condiciones que deberán reunir las empresas argentinas asociadas;
- n) Las exportaciones de los productos pesqueros obtenidos conforme al régimen establecido en el presente artículo no gozarán de los beneficios dispuestos en los regímenes promocionales ni de reembolsos tributarios de ninguna naturaleza.

## Capítulo X Tripulaciones

Art. 39. — A los fines de esta ley, será obligatorio, para todo el personal embarcado a bordo de los buques pesqueros, poseer libreta de embarco, título, patente, cédula de embarco o certificado de habilitación profesional expedidos por las autoridades competentes en las condiciones que estipulen las normas nacionales.

Art. 40. — La tripulación de los buques pesqueros deberá estar constituida de acuerdo a las estipulaciones siguientes:

- a) Las habilitaciones de capitanes y oficiales se reservan para los argentinos nativos, por opción o naturalizados;
- b) El 75% del personal de maestranza, marinería y operarios de planta a bordo de los buques pesqueros debe estar constituido por argentinos o extranjeros con más de diez (10) años de residencia permanente efectivamente acreditada en el país;
- c) En caso de requerirse el embarco de personal extranjero, ante la falta del personal enunciada en el inciso anterior, el embarco del mismo será efectuado en forma provisoria cumpliendo con las normas legales vigentes.

Habiendo tripulantes argentinos en disponibilidad, la tripulación debe ser completada con ellos.

Las reservas establecidas en los incisos a) y b) en ningún caso podrán dificultar la operatoria normal de los buques pesqueros, quedando facultado el Consejo Federal Pesquero para dictar las normas necesarias para cumplir esta disposición.

## Capítulo XI Registro de la Pesca

Art. 41. — Créase el Registro de la Pesca, el que será llevado por la autoridad de aplicación, y en el que deberán inscribirse todas las personas físicas y jurídicas que se dediquen a la explotación comercial de los recursos vivos marinos en las condiciones que determine la reglamentación.

Art. 42. — La falta, suspensión o cancelación de la inscripción prevista en esta ley no impedirá el ejercicio de las atribuciones acordadas a la autoridad de aplicación, ni eximirá a los sometidos a su régimen de las obligaciones y responsabilidades que se establecen para los inscritos.

## Capítulo XII Fondo Nacional Pesquero

Art. 43. — Créase el Fondo Nacional Pesquero (FONAPES) como cuenta especial, que se constituirá con los recursos siguientes:

- a) Aranceles anuales por permisos de pesca;
- b) Derechos de extracción sobre las capturas de los buques de matrícula nacional, habilitados para la pesca comercial;

- c) Derechos de extracción en jurisdicción nacional para buques locados a casco desnudo según establezca el Consejo Federal Pesquero;
- d) Cánones percibidos sobre la actividad de buques de matrícula extranjera con licencia temporaria de pesca en jurisdicción nacional;
- e) Las multas impuestas por transgresiones a esta ley y su reglamentación;
- f) El producto de la venta de la producción extraída, las artes de pesca y buques decomisados por infracciones, según el artículo 53 de esta ley y subsiguientes;
- g) Donaciones y legados;
- h) Otros ingresos derivados de convenios con instituciones o entidades nacionales e internacionales;
- i) Aportes del Tesoro;
- j) Tasas por servicios requeridos;
- k) Los intereses y rentas de los ingresos mencionados en los incisos precedentes.

Art. 44. — El Fondo Nacional Pesquero será administrado por la autoridad de aplicación con intervención del Consejo Federal Pesquero, y será coparticipable entre la Nación y las provincias con litoral marítimo, en las proporciones que determine este último.

Art. 45. — El Fondo Nacional Pesquero se destinará a:

- a) Financiar áreas de investigación del INIDEP con hasta el veinticinco por ciento (25%) del total del fondo;
- b) Financiar equipamientos y tareas de patrullaje y control policial de la actividad pesquera realizados por las autoridades competentes, con hasta el veinte por ciento (20%) del fondo;
- c) Derechos de extracción en jurisdicción nacional para buques locados a casco desnudo según establezca el Consejo Federal Pesquero;
- d) Financiar la formación y capacitación del personal de la pesca a través de los institutos oficiales con hasta el dos por ciento (2%) del fondo;
- e) El Consejo Federal Pesquero podrá modificar los porcentajes indicados en los incisos anteriores, en base a la experiencia y las necesidades básicas que se presenten;
- f) Transferir a las provincias integrantes del Consejo Federal Pesquero y al Estado nacional un mínimo del cincuenta por ciento (50%) del fondo, en concepto de coparticipación pesquera, la que se distribuirá de acuerdo a lo establecido por el Consejo Federal Pesquero.

### Capítulo XIII

#### *Régimen de infracciones y sanciones*

Art. 46. — Las personas físicas, jurídicas y/o los civiles resultantes de su agrupación que intervengan en la prospección, captura, industrialización, comercio y/o transporte de los recursos vivos marinos, sus productos o subproductos, deben estar inscritos en los registros que llevará la autoridad de aplicación establecida por el artículo 6° de esta ley a efectos de ser autorizadas para el desarrollo de las actividades descriptas.

Art. 47. — La carga de productos pesqueros que se halle a bordo de un buque pesquero de pabellón extranjero que se encuentre en los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina o en aguas en las que la República Argentina tenga derechos de soberanía sobre los recursos vivos marinos, sin contar con permiso o autorización expresa expedido por la autoridad de aplicación, se presume que han sido capturadas en dichos espacios.

Art. 48. — La carga de productos pesqueros que se halle a bordo de un buque pesquero de pabellón nacional que se encuentre en una zona de veda, y que no hubiera sido declarada antes del ingreso a dicha zona, se presume que ha sido capturada en dichos espacios y será objeto de las penalidades previstas en esta ley.

Art. 49. — Las infracciones a las leyes, decretos o resoluciones que regulen las actividades vinculadas con los recursos vivos del mar y ríos bajo jurisdicción argentina, se trate de buques nacionales o extranjeros, serán sancionadas por la autoridad de aplicación, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley.

Art. 50. — En relación a los buques extranjeros la Prefectura Nacional Argentina instruirá el sumario correspondiente a fin de determinar la configuración de la infracción que se presuma. Finalizada la etapa de instrucción, elevará las actuaciones a la autoridad de aplicación a efectos de determinar las sanciones que pudieran corresponder. La autoridad de aplicación podrá ordenar la reapertura del sumario, de oficio o a pedido de parte, de considerarlo necesario.

Art. 51. — Cuando la autoridad de aplicación, previa sustanciación del sumario correspondiente, compruebe que se ha incurrido en alguna de las conductas ilícitas tipificadas en la normativa vigente, aplicará una o más de las sanciones que se consignan a continuación, de acuerdo a las características del buque, la gravedad del ilícito y los antecedentes del infractor:

- a) Multa de diez mil pesos (\$ 10.000) hasta un millón de pesos (\$ 1.000.000);
- b) Suspensión de la inscripción en los registros llevados por la autoridad de aplicación al buque mediante el cual se cometió la infracción, de quince (15) días a un (1) año;
- c) Cancelación de la inscripción señalada en el inciso anterior;
- d) Decomiso de las artes y equipos de pesca;
- e) Decomiso del buque.

La autoridad de aplicación deberá establecer el monto mínimo de la multa a aplicar para los casos de infracciones graves, tales como pescar en zona de veda, pescar sin permiso o usar artes, técnicas y equipos prohibidos, sin perjuicio de otras que tipifique la autoridad de aplicación. En este caso, la multa no podrá ser inferior a cincuenta mil pesos (\$50.000) ni superior a dos millones de pesos (\$2.000.000), sin perjuicio de lo establecido en los artículos 52 y 53 de esta ley.

Art. 52. — Cuando la gravedad de la infracción así lo justificare, podrá aplicarse al armador del buque además de las sanciones previstas en el artículo anterior, la suspensión de su inscripción, la que podrá alcanzar a la totalidad de los buques que opere en la actividad pesquera.

Art. 53. — Además de las sanciones previstas por el artículo 51 de esta ley, se procederá asimismo al decomiso de la captura obtenida por el pesquero durante el viaje de pesca de que se trate, lo que podrá ser sustituido por una multa equivalente al valor de dicha captura en el mercado a la fecha de arribo a puerto, conforme lo disponga la autoridad de aplicación.

Art. 54. — Tratándose de embarcaciones extranjeras, la autoridad de aplicación podrá además disponer la retención del buque en puerto argentino hasta que, previa sustanciación del respectivo sumario, se haga efectivo el pago de la multa impuesto o se constituya fianza u otra garantía satisfactoria, si fuera el caso.

Art. 55. — La autoridad de aplicación, cuando lo considere procedente por la gravedad del hecho, podrá interrumpir el viaje de pesca en el que se cometió la supuesta infracción.

Art. 56. — Ante la presunción de infracciones graves y aunque no hubiera finalizado la sustanciación del sumario, la autoridad de aplicación podrá, mediante resolución fundada, suspender preventivamente la inscripción del presunto infractor, hasta tanto se dicte la resolución definitiva. En este caso, la sustanciación del sumario no podrá superar el plazo de sesenta (60) días corridos.

Art. 57. — Aplicada la suspensión prevista en el artículo anterior, el buque no podrá durante ese período, abandonar por ninguna razón el puerto donde se encontrase cumpliendo la medida preventiva, sin la expresa autorización de la autoridad de aplicación.

Art. 58. — En caso de reincidencia dentro de los cinco (5) años de cometida una infracción, los mínimos y máximos establecidos en el último párrafo del artículo 51 se duplicarán, sin perjuicio de la pena mayor que pudiera corresponder por la gravedad de la infracción cometida. Para la reincidencia se tendrán en cuenta al buque, al armador y al propietario indistintamente.

Art. 59. — Las sanciones impuestas por la autoridad de aplicación serán recurribles dentro de los diez (10) días hábiles de notificadas, mediante recurso de reconsideración ante la autoridad de aplicación y apelación en subsidio ante el Consejo Federal Pesquero. La reconsideración deberá ser resuelta dentro de los treinta días hábiles contados desde la fecha de su interposición. En el supuesto de haberse aplicado la suspensión preventiva prevista por el artículo 56, dicho plazo se reducirá a diez (10) días hábiles. Si la resolución que resuelve el recurso de reconsideración fuera confirmatoria de la sanción, notificado que fuera el infractor, y previo depósito del importe correspondiente si se tratase de multas, se reinitirá el expediente dentro de los diez (10) días hábiles a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, la que entenderá como tribunal de alzada.

Art. 60. — La suspensión o cancelación de la inscripción en los registros exigidos por esta ley implicará el cese de las actividades mencionadas en el artículo 46 de la misma. Las sanciones serán notificadas por la autoridad de aplicación a las reparticiones u organismos pertinentes con el fin de no otorgar ninguna clase de certificados que sirvan para facilitar las operaciones de navegación para captura, compra, venta, transporte, elaboración, almacenamiento o exportación de los recursos

vivos marinos provenientes de la pesca, sus productos o subproductos.

Art. 61. — Los armadores y propietarios infractores a la normativa vigente serán personal y solidariamente responsables por las sanciones establecidas en el artículo 51, subsiguientes y concordantes y de las restantes consecuencias derivadas del hecho ilícito.

Art. 62. — Cuando el buque infractor sea de bandera nacional, y sin perjuicio de las sanciones previstas en esta ley para el armador, la autoridad de aplicación remitirá copia de lo actuado a la Prefectura Naval Argentina a efectos de labrar el correspondiente sumario respecto a la responsabilidad del capitán y/o patrón, el que según la gravedad de la infracción cometida será pasible de alguna o algunas de las siguientes sanciones:

- a) *Apercibimiento;*
- b) *Multa desde un mil pesos (\$1.000), hasta cien mil pesos (\$100.000);*
- c) *Suspensión de la habilitación para navegar hasta dos (2) años;*
- d) *Cancelación de la habilitación para navegar.*

Art. 63. — La autoridad de aplicación no inscribirá sociedades ni agrupaciones empresarias cuando uno o más de sus directores o administradores, gerentes, síndicos, mandatarios o gestores estuvieran sancionados con suspensión o cancelación de la inscripción en los registros establecidos por el artículo 41, debido a infracciones a esta ley o a su reglamentación, siempre que mediare pronunciamiento firme. Asimismo, eliminará a aquellas que estuvieran inscriptas cuando, dentro del término que se les fije, no excluyeran al infractor.

Art. 64. — Cuando se sancionare a personas físicas o jurídicas con cancelación de la inscripción en el registro creado por esta ley basada en sentencia firme, ni las primeras, ni los integrantes de las segundas podrán formar parte de los órganos de representación, administración y/o dirección de otras sociedades ni agrupaciones empresarias, para desarrollar las actividades previstas en esta ley, ni hacerlo a título individual.

Art. 65. — La falta de pago de las multas impuestas en consonancia con esta ley originará la emisión de certificados de deuda, los que serán expedidos por la autoridad de aplicación de acuerdo con sus registraciones contables y revestirán el carácter de título ejecutivo.

#### Capítulo XIV

##### *Disposiciones complementarias y transitorias*

Art. 66. — A los efectos de un mejor ordenamiento operativo pesquero, la autoridad portuaria pertinente procederá juntamente con la Prefectura Naval Argentina a efectuar el traslado a otros puertos o zonas especiales de aquellos buques que por su inactividad, abandono o desuso, constituyan un estorbo para las normales condiciones operativas portuarias. El costo que demande dicho traslado será solventado por el titular del buque.

En caso de buques sujetos a embargo o interdicción, el juez interviniente deberá autorizar su traslado a los efectos de no afectar el desarrollo normal de la actividad portuaria.

Art. 67. — Las disposiciones de esta ley rigen sin perjuicio de los derechos y obligaciones que en la materia

objeto de la misma correspondan a la Nación Argentina en virtud de los tratados internacionales de los cuales fuere parte.

Art. 68. — El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar esta ley dentro de los noventa (90) días contados desde su promulgación.

Art. 69. — Invítase a las provincias con litoral marítimo a adherir al régimen de la presente ley para gozar de los beneficios que por ésta se otorgan.

Art. 70. — La autoridad de aplicación convocará a las provincias con litoral marítimo a integrarse al Consejo Federal Pesquero en un plazo de sesenta (60) días a partir de la promulgación de esta ley.

Art. 71. — La autoridad de aplicación procederá dentro de los noventa (90) días de promulgada esta ley, a la reinscripción de todos los buques con permiso de pesca vigente. Los permisos correspondientes a los buques que no hubieran operado durante los últimos ciento ochenta (180) días en forma injustificada para la autoridad de aplicación y el Consejo Federal Pesquero, caducarán automáticamente, cualquiera fuera su situación jurídica.

Los permisos preexistentes de los buques que cumplan con los requisitos para su reinscripción, serán inscriptos en forma definitiva, y quedarán sujetos al régimen de pesca previsto en la presente ley.

Art. 72. — Deróganse el artículo 4º de la ley 17.094, el inciso 1) del artículo 6º y el artículo 8º de la ley 21.673, el artículo 2º de la ley 22.260, y las leyes 17.500, 18.502, 19.001, 20.136, 20.489, 21.514, 22.018, 22.107 y toda otra norma legal, en todo aquello que se oponga a lo establecido en la presente ley.

Art. 73. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Alberto R. Pierri. — Esther H. Pereyra  
Arandía de Pérez Pardo.*

**Sr. Presidente (Menem).** — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

**Sr. Sala.** — Señor presidente, me voy a referir al Orden del Día N° 1.260 que contiene el dictamen de comisión sobre el proyecto de ley federal de pesca. Se trata del proyecto original producido en este Senado por los senadores Mac Karthy y Ludueña, que ha sido devuelto con modificaciones por la Cámara de Diputados.

El dictamen insiste en la sanción de este Senado en cuanto a los artículos 3º y 5º del proyecto original, que reivindican la jurisdicción y dominio de las provincias sobre las doce millas, y en cuanto a los artículos 42 y 65, también con su texto original.

Con respecto al resto del proyecto, las modificaciones han sido acordadas y consensuadas con todos los sectores, en las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.

Esta iniciativa viene a considerar una cuestión de límite que existe en este momento que incluye un paro biológico pesquero que ha paralizado a todos los barcos pesqueros y a todas las plantas de procesamiento de la República Argentina, con el consiguiente impacto económico y social. Por ello solicito su aprobación.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz, del bloque de la Unión Cívica Radical.

**Sr. Melgarejo.** — Señor presidente: las circunstancias que se han dado en el tratamiento del proyecto de ley de pesca, tanto hace un año atrás como actualmente, han querido que esta iniciativa pasara por este Senado sin que pudiéramos debatirla, pero lo importante es que vamos a contar definitivamente con la Ley de Pesca.

De manera que solicito la inserción de los fundamentos que apoyan este dictamen que se pone a consideración del honorable cuerpo y nuestro bloque anuncia el voto favorable a esta iniciativa.

— El texto de la inserción solicitada es el siguiente:

Señor presidente:

Cuando en el transcurso del período legislativo pasado, presentamos nuestro proyecto de ley de pesca, teníamos como propósitos fundamentales, lograr que se estableciera un régimen regulatorio más efectivo para la actividad pesquera que permita una explotación racional de los recursos vivos del mar, brindar un régimen de mayor seguridad jurídica a todos los involucrados en la actividad y aumentar la participación de las provincias en la toma de decisiones.

Entendíamos que los mecanismos institucionales y los órganos que determinaban las políticas para el sector eran inadecuados, pensamos que había llegado el momento de barajar y dar de nuevo. Para ello, señor presidente otorgamos el rango de Secretaría a la actual Subsecretaría de Pesca y propusimos la creación de un Consejo Federal Pesquero cuyo surgimiento resultaría de un tratado a firmarse entre la Nación y las provincias con litoral marítimo.

La pesca en nuestro país llegó a un límite de saturación tal que presenta inquietantes evidencias de que se han sobrepasado los límites de sustentabilidad biológica a largo plazo, por lo que el eje de la cuestión se debe desplazar de la promoción de la actividad al control de las capturas. En esa problemática, fundamentamos la necesidad de lograr un régimen de pesca que regule adecuadamente la materia.

Cuando hablamos de la preservación del recurso pesquero, de la necesidad de una explotación biológicamente sostenible, también lo

hacemos pensando en que si éste se agota, junto con él desaparece gran parte de la riqueza de las provincias patagónicas; y lo hacemos también pensando en nuestros descendientes, en las generaciones futuras, a las que les habremos quitado la posibilidad de vivir de su mar. Pensamos en el aumento de la desocupación, en la quiebra de muchas empresas que el agotamiento de los caladeros generará y en las miles de familias que pasarán a engrosar la larga lista de excluidos sociales por falta de trabajo.

Preservar nuestro patrimonio ictícola, mediante un aprovechamiento racional de los recursos, implica también ocupación efectiva del mar y ejercicio de la soberanía nacional.

Mantener una conducta conservacionista no es sólo una actitud inteligente con miras al futuro y un deber moral para con las generaciones venideras. Mantener una conducta conservacionista, es también un acto responsable, racional, cargado de pragmatismo para afrontar la realidad cotidiana, para lograr nuestra supervivencia como sociedad pacífica que desea prevenir conflictos sociales y mitigar las consecuencias de las desigualdades económicas.

Al presentar nuestro proyecto de ley, el objetivo era realizar un aporte al debate para lograr así una ley de pesca adecuada a las nuevas circunstancias por las que atraviesa la actividad.

Dijimos en esa oportunidad, señor presidente, que la Argentina se debate entre:

- Políticas pesqueras improvisadas.

- Una legislación inadecuada, que básicamente tiende al fomento y desarrollo de la pesca, precisamente cuando el recurso está en franco retroceso, y

- La incapacidad manifiesta del Estado, de controlar adecuadamente su litoral marítimo.

Y nuestras afirmaciones no eran caprichosas. Hablamos de políticas pesqueras improvisadas porque lamentablemente, a pesar de que nuestro país tiene un litoral marítimo enorme vivió durante muchos años, de espaldas al mar y las provincias se mantuvieron ajenas a la explotación de la riqueza ictícola, permitiendo que el estado nacional lo hiciera mediante decretos, resoluciones y disposiciones.

Y, señor presidente, decimos políticas pesqueras improvisadas, porque basta leer el debate que se produjo cuando el bloque de la Unión Cívica Radical se opuso a los convenios con la Comunidad Económica Europea, para comprender la magnitud de los desaciertos.

El 20 de abril de 1994 se sancionó la ley 24.316 y se aprobaron los acuerdos con la Comunidad Económica Europea. En ese debate decía la Unión Cívica Radical, que había demasiado esfuerzo de pesca en los casos puntuales de la merluza y el langostino, y las propias estadísticas de la Secretaría de Pesca así lo indicaban junto con los informes del INIDEP.

También decíamos que los organismos internacionales habían recomendado a los países que controlaran eficazmente los esfuerzos de pesca, estableciendo vedas o restricciones de capturas.

Decíamos también, que la cesión de permisos de pesca de un buque argentino a otro comunitario era riesgosa, porque este último tiene mayor capacidad de captura que aquél, y en consecuencia, estaban dadas las condiciones para una potencial sobrepesca.

Asimismo señalábamos que la incorporación de barcos modernos pero usados, más los charcos, conspiraban seriamente contra la industria naval argentina.

La industria naval argentina, señor presidente, ha sufrido y sufre las consecuencias de una política inadecuada, de esas improvisaciones de las que hablo.

Sería largo de enumerar en una cronología detallada, los decretos y resoluciones que permitieron a partir de 1971 la importación de buques pesqueros en algunos casos sin límite de antigüedad, con cero por ciento de arancel, en otros con aranceles preferenciales. Pero es a partir de 1989 que la industria naval argentina sufre con mayor énfasis las consecuencias de una política que ha favorecido y privilegiado sistemáticamente a la industria naval extranjera. Política que se ha prolongado hasta nuestros días, y que no tiene antecedentes en la historia argentina.

La industria naval puede haber tenido todas las falencias que caracterizaron a la industria argentina durante años, pero es absolutamente imposible, que cualquier actividad industrial de nuestro país pueda competir en el mundo, si está sometida a un sistema de desprotección y a su vez de penalización por parte de las autoridades de su propio país.

El secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en el mes de julio de este año, en la ciudad de Mar del Plata, reconoció que con el acuerdo marco entraron barcos nuevos con el objeto de reemplazar a otros. Pero a través de artilugios, los barcos reemplazados continuaron pescando, tal cual lo habíamos advertido en aquel debate de abril de 1994. Asimismo, con respecto a la incorporación de factorías comunitarias, reconoció que significaron una mayor capacidad de captura agregada a la preexistente, señalando que en este caso fracasaron los cálculos.

Hablamos también, señor presidente, de una legislación inadecuada, porque la falta de una política coherente y responsable por parte de las autoridades nacionales y de algunas provincias,



permitió que se generara una maraña de decretos y resoluciones a los que se ha tenido que enfrentar todo el sector pesquero: desde los trabajadores hasta los empresarios, pasando por el poder administrador.

Esa maraña de decretos y resoluciones produjo una falta de transparencia y ése es otro de los problemas que hubo y hay en el sector pesquero argentino.

Hubo sin dudas intereses muy fuertes que se beneficiaron con la ausencia de normas claras que regularan la actividad y pusieran límites al proceso en el que hoy estamos desembocando.

Se generó algo así como una especie de industria de la venta de los permisos de pesca y se recorría el mundo ofreciéndolos.

A partir de la implementación de la actual política económica, comienza a producirse este proceso de crisis que deriva en una superpesca o en un esfuerzo de captura que hace que un recurso que es renovable pero no inagotable, corra peligro de extinguirse.

De todos modos, hace ya años que la Unión Cívica Radical viene alertando sobre la falta de control y sus consecuencias, indicando las señales alarmantes acerca de lo que ocurría en relación con los recursos pesqueros.

Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo se respondía de manera obstinada, negando las evidencias de sobrepesca e insistiendo en que la situación estaba controlada, pocos meses antes de que se estableciese por decreto una veda de más de 110 mil kilómetros cuadrados en el mar argentino.

Por la ausencia absoluta de control, la pesca de merluza, que no puede exceder las 400 mil toneladas anuales, ya estaba superando las 800 mil toneladas, según las consideraciones más conservadoras. Ahora, ante la gravedad de la situación, esta veda ha sido ampliada a 220.000 kilómetros cuadrados, junto con la suspensión de la pesca por treinta días para los buques congeladores y por quince días para los barcos fresqueros.

Es por ello, señor presidente, que en oportunidad de presentar nuestro proyecto de ley, sostuvimos que el régimen de pesca industrial debía implicar un cambio completo respecto del actualmente vigente.

Fundamentalmente nuestra afirmación en el hecho de que debía combatirse la sobreexplotación del recurso en nuestro país.

Sostuvimos que las implicancias de este notable aumento de las capturas determinaba que

el eje de la cuestión se debiera desplazar, pasando de la promoción del desarrollo de la actividad al control de las capturas orientado a lograr la sustentabilidad del recurso. Complementariamente, planteamos la necesidad de aumentar los recursos dedicados a la investigación y al control de la actividad de los buques de naciones no ribereñas.

Manifestamos que la soberanía se detiene también investigando el recurso ictícola y patrullando el litoral marítimo, otorgando los recursos necesarios a nuestras universidades y a los institutos especializados para que investiguen, así como también a la Prefectura Naval Argentina y a la Armada de nuestro país, para que controlen.

Planteamos que uno de los grandes interrogantes que enfrentaban las empresas, era la falta de proyectos de largo plazo que fueran viables económica y técnicamente, y que la preservación de la rentabilidad empresarial depende de la capacidad del Estado para determinar el grado de explotación que es biológicamente sostenible a largo plazo y de la efectividad de los controles para hacerla cumplir.

También insistimos en que la intervención del Estado como regulador del esfuerzo pesquero, es una función irremplazable.

Dejamos sentado que un régimen de cuotas globales, como proponía la mayoría en esta cámara, produce el efecto no deseado de desatar una "carrera por pescar", que atenta contra la discriminación en las capturas y crea un círculo vicioso que lleva a la depredación.

Hicimos notar que estábamos frente a una disyuntiva. Avanzábamos en la aplicación de cuotas globales, tal como lo propuso el dictamen de mayoría en esta Cámara, y corríamos el riesgo de repetir la experiencia negativa de otros países del mundo; o bien adoptábamos un régimen de cuotas individuales que permitiera una mejor administración y control del recurso, como nosotros propusimos. Hoy vemos con agrado que nuestra propuesta se ha receptado, a través de las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados.

También destacamos que los regímenes de cuotas individuales, sobre todo cuando éstas son transferibles y dan lugar al surgimiento de mercados secundarios, tienen una enorme potencialidad para inducir conductas acordes con la explotación racional del recurso. Afortunadamente, Diputados también le ha incorporado este concepto de transferibilidad de las cuotas de captura al proyecto que tenemos en consideración.



Planteamos la necesidad de romper el círculo vicioso originado en el régimen de acceso al mercado pesquero. Este régimen se asentaba en el otorgamiento selectivo y restrictivo de permisos gratuitos, temporalmente indefinidos y a buques en particular, dando lugar a una tradicional falta de transparencia en los trámites, a comportamientos rentísticos, a la falta de incentivo para renovar los buques más antiguos, al riesgo de sobrepesca de las especies más valiosas y a la falta de recursos presupuestarios para mejorar el conocimiento del stock pescable y el control del mar territorial.

Propusimos un régimen de onerosidad para las cuotas de pesca, pues entendemos que quien obtiene una riqueza de la explotación pesquera, tiene que pagarle a la sociedad porque se asegura un beneficio mayor del que recibe el resto de la población por la posibilidad de utilizar un recurso que es propiedad de todos.

Al ser las cuotas transferibles —esto es, negociables aunque con los límites que impone la propia ley—, lo cierto es que la cuota en sí misma genera un derecho individual en cabeza del particular, que puede ser negociable en virtud de la capacidad potencial de explotación de ese recurso natural, y ese derecho tiene un valor económico.

Es decir, planteamos que aquel que quiere acceder a la explotación de ese recurso y obtener una riqueza, debe pagarle al Estado, más allá de lo que a su vez le paga por el ejercicio concreto de esa capacidad. Los dos conceptos quedan claramente distinguidos a partir de las modificaciones que a último momento se introdujeron en el debate en particular en la Cámara de Diputados. Por un lado, la capacidad —que es la cuota—, y por el otro, el ejercicio concreto de esa capacidad, que se refleja en el permiso de pesca.

Nos congratulamos de que la ley haya receptado finalmente estas ideas. En la norma aparece la contraprestación que el privado debe pagar por el ejercicio concreto de la pesca; son los derechos de extracción y los cánones por el ejercicio de la pesca, que establece el Consejo Federal Pesquero en el artículo 9º inciso i) de la ley. Por otro lado, el artículo 27 determina que el Consejo Federal Pesquero establecerá un derecho de transferencia a cargo del cesionario en relación al volumen de captura y al valor de la especie que la cuota autoriza. Es decir que el privado debe pagarle al Estado, y por ende a la sociedad, por la capacidad portencial de hacer efectivo el ejercicio de ese derecho.

Propusimos un procedimiento novedoso para la conformación del Consejo Federal Pesquero, a través de un convenio a firmarse entre las provincias con litoral marítimo y la Nación, además de asignarle al propio Consejo el rol de autoridad de aplicación de la ley.

Dijimos entonces, que la Ley de Pesca que este Honorable Congreso sancione "debe ser el fruto del consenso y fundamentalmente de la participación de los más directos interesados, que sin duda son las provincias con litoral marítimo".

El tiempo nos dio la razón. El caladero está al borde del colapso y nuestras ideas, que al principio eran resistidas, fueron paulatinamente aceptadas, y con la colaboración de distintos sectores que las preconizan, entre ellos, la del Subsecretario de Pesca, se pudieron establecer las bases de un nuevo diálogo.

Afortunadamente, podemos sentirnos satisfechos, dado que la Cámara de Diputados incorporó al Proyecto gran parte de nuestras ideas. Allí, todos los legisladores patagónicos y varios bonaerense hicimos frente común en la búsqueda del consenso sobre los valores que deben priorizarse, así como también en la búsqueda del consenso sobre las nuevas reglas de juego que deben orientar la actividad pesquera.

No dudo de que el agravamiento de la crisis en el sector, a punto de colapsar, y la extensa veda decretada hicieron que hasta los más reticentes al cambio del modelo pesquero tomaran nota de que era insostenible su posición.

Sin duda, el trabajo de los Secretarios de Pesca de las provincias con litoral marítimo, relacionándose más fuertemente con los legisladores, y las múltiples recomendaciones del Consejo Federal Pesquero en el sentido de modificar el régimen de pesca, propugnando la introducción de un sistema de cuotas individuales transferibles, han tenido que ver, y mucho, en el cambio de actitud.

Señor Presidente, la nueva ley de pesca, por sí sola, no va a solucionar la crisis en la que está el sector, ni tampoco la depredación que sufre el mar. Para ello es necesario que se produzca un cambio de la política.

Señor Presidente, seguramente, la instrumentación del nuevo modelo pesquero producirá un fuerte reordenamiento dentro del sector que dejará secuelas. Para poder hacer frente a las fuertes presiones que provendrán desde los distintos grupos de interés, necesitaremos de un consenso político que respalde las medidas que la aplicación de la nueva ley implica.

La futura norma puede establecer un marco, pero si los funcionarios no están dispuestos a preservar el patrimonio, que es de todos los argentinos, si no están comprometidos con la elaboración de productos en tierra, y si no existe una verdadera política de fondo que incentive el agregado de mano de obra, no va a existir solución a la crisis del sector pesquero.

De nada va a servir que la ley diga todo lo que dice, si no hay un gobierno que facilite la exportación de productos con mano de obra argentina incorporada, y deseche la idea de mantenernos cautivos de los mercados europeos. En el marco de los acuerdos con la Comunidad Económica Europea se ha canjeado importación de buques libres de arancel por mercado para productos que no tengan valor agregado.

Un tema importante es nuestra política de pesca con el Reino Unido, donde está siempre latente el peligro de que nuestro gobierno acepte la firma de un tratado que asegure a los malvinenses un nivel de captura estable del calamar, que como sabemos se traslada desde nuestras aguas hacia las Islas Malvinas. Según el acuerdo propuesto por los ingleses, esto implicaría resignar parte de nuestros volúmenes de captura de calamar, para permitir su pesca aguas afuera.

En síntesis, los legisladores debemos estar atentos para corregir aspectos o modalidades de implementación que pueden desnaturalizar todas las buenas intenciones puestas en la discusión de esta iniciativa. Debe existir un compromiso muy serio de todo los sectores, en el sentido de trabajar para que los principios que guiaron el consenso de los legisladores se plasmen en la realidad cotidiana.

Ello permitirá a los legisladores reclamar el cumplimiento de políticas específicas, que desde hace muchos años el gobierno nacional está dando señales de no querer implementar.

Desde el Congreso de la Nación, podremos exigir transparencia a los funcionarios del área y que el Poder Ejecutivo Nacional asuma, durante el resto de su mandato, el compromiso de poner en práctica un modelo que ubique en lugar preferente a la industria nacional, al trabajo de los argentinos y a la conservación de los recursos que nos pertenecen a todos.

Si sabemos ser custodios de esos acuerdos, tendremos una ley de pesca útil para el país.

Para hacer realmente efectivo este cambio es necesario dotar a las instituciones gubernamentales relacionadas con el área de un status que se

condiga con el grado de desarrollo alcanzado por la actividad pesquera.

Es así que entendemos que la actual Subsecretaría de Pesca debe tener la jerarquía de Secretaría de Estado, con capacidad suficiente para conducir y ejecutar la política pesquera nacional.

Complementariamente con esta transformación, creemos indispensable destacar la importancia que reviste la creación del Consejo Federal Pesquero.

Este nuevo órgano, en el que estarán representadas en forma efectiva las provincias con litoral marítimo, ha sido dotado de funciones tan importantes como: establecer la política pesquera nacional, la política de investigación pesquera, la captura máxima permisible por especie, aprobar los permisos de pesca comercial y experimental, planificar el desarrollo pesquero nacional, fijar las pautas de coparticipación en el Fondo Nacional Pesquero, establecer derechos de extracción y fijar cánones por el ejercicio de la pesca, asesorar a la Secretaría de Pesca en materia de negociaciones internacionales y establecer los derechos de transferencia de las cuotas de captura.

Esto, señor Presidente, es un avance mayúsculo en la concreción de un federalismo verdadero.

Otro notable cambio de rumbo en la política del área está dado por la importancia que en esta ley se le otorga a las actividades de investigación científica y técnica, referidas a la evaluación y conservación de los recursos vivos marinos.

No sólo se dispone el financiamiento de las tareas de investigación del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, con hasta el 25 % del Fondo Nacional Pesquero, sino que se prevé que corresponda al INIDEP la planificación y ejecución de sus actividades científicas y técnicas con las provincias.

Así, señor Presidente, las provincias, a través de nuestras universidades e institutos científicos, deberemos comprometernos activamente en los procesos de evaluación y conservación de los recursos ictícolas.

Señor Presidente, también deseo poner de manifiesto que nuestro bloque discrepa sustancialmente con el tratamiento que la Cámara de Diputados le ha dado a los artículos tercero y quinto de la ley, que se refieren al dominio y jurisdicción. Y en ese sentido anticipo que no aceptaremos las modificaciones que introdujo la cámara revisora y que solicitaremos que el Honorable Senado, como cámara de origen, insista

con la redacción originaria con los dos tercios de los votos de los Senadores presentes.

Ello así, aun cuando la redacción originaria que impuso la mayoría de esta Cámara, no se compadecía exactamente con nuestra posición, pero entendemos que de todos modos garantiza mucho mejor los intereses provinciales que el texto modificado por Diputados.

Señor Presidente, el artículo 124 de la Constitución Nacional establece claramente que "corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio". Esta disposición debe ser considerada con cuidado, en la medida que al titular del dominio de algún bien, como regla general, le corresponde el ejercicio de la jurisdicción sobre el mismo.

Es decir que al titular del dominio de una cosa, en nuestro caso los recursos naturales, como son los recursos vivos del mar, le compete el ejercicio de las jurisdicciones susceptibles de ser ejercitadas sobre los mismos. Cada una de dichas jurisdicciones se corresponderá con alguna función de gobierno que hace a la utilización del recurso sobre el cual ella se ejerce.

Si examinamos con detenimiento la redacción que le ha dado la Cámara de Diputados a los artículos tercero y quinto, advertiremos que se produce una suerte de delegación por parte de las provincias a favor de la Nación, de sus potestades jurisdiccionales. O mejor dicho, una toma de atribuciones por parte del Estado nacional, en desmedro de las que son propias de los Estados provinciales.

La combinación de ambas disposiciones, nos induce a pensar que el ejercicio de esa delegación por parte de la Nación, implica un vaciamiento del dominio que tienen las provincias sobre los recursos pesqueros. Esto, señor presidente, no es ni más ni menos que desnaturalizar la Constitución Nacional.

De otro modo, no se entiende cuál habría sido la intención del constituyente de 1994 al establecer la cláusula de resguardo de la competencia provincial, que importa el último párrafo del artículo 124.

Queremos destacar asimismo, señor presidente, una segunda gran diferencia, en este caso, conceptual, que nos aparta de la opinión consensuada en el proyecto que remite Diputados.

En nuestra opinión, el procedimiento para la conformación del Consejo Federal Pesquero debería quedar reservado exclusivamente a las provincias con litoral marítimo y a la Nación,

quienes conjuntamente deberían decidir la instrumentación del mismo, en cuanto a su objeto, estructura orgánica, composición, competencias, etcétera.

Este procedimiento, que se inscribe dentro de un verdadero federalismo de concertación, y que reconoce su espíritu en el artículo 124 de la Constitución Nacional, permitiría vertebrar de manera definitiva los intereses, muchas veces contrapuestos entre la Nación y las provincias, al brindar una herramienta para la solución de potenciales conflictos interjurisdiccionales.

Creemos que la puesta en práctica de mecanismos institucionales como el propuesto por nuestro bloque, hubiese constituido una respuesta eficaz, para un Estado que necesita reestructurarse, dejando atrás décadas de ineficiencia y centralismo.

La Argentina acusa un elevado déficit en lo que hace a la vigencia del federalismo. Nuestra forma de Estado se ha visto devaluada en el tiempo.

Esta situación ha sido en gran medida el resultado de una tendencia de larga data de conformidad con la cual de un modo o de otro en materia de facultades concurrentes o de asuntos que merecían un reparto de facultades entre los dos niveles de gobierno, nacional y provincial, la interpretación o la práctica fue llevando a la atribución de nuevas esferas de competencia propia y exclusiva a favor de la Nación.

De este modo se ha llevado a afrontar desde la Nación todo asunto de este carácter, configurándose una suerte de "federalismo de imposición".

Así, el nivel de gobierno con mayor poder real predominará siempre por sobre los que son más débiles, obligándolos a acatar las soluciones provenientes de su centro de decisión.

Fue por ello que propiciamos que la autoridad de aplicación de la ley de pesca fuese el Consejo Federal Pesquero y no la Secretaría de Pesca de la Nación.

Fue por ello, que propusimos que esa autoridad de aplicación, el Consejo Federal, se constituyese conforme un marco innovador, que trata de rescatar el espíritu contenido en el nuevo artículo 124 de la Constitución Nacional.

Inspirados en esta filosofía, propusimos la celebración de un tratado entre la Nación y las provincias marítimas, para la gestión de facultades comunes vinculadas con la conservación y explotación del recurso pesquero.

Entendemos que implicaba adoptar una decisión política, que fundada en una visión global

de la problemática de la pesca, ofrezca soluciones orgánicas y progresivas, basadas en la voluntad conjunta de las jurisdicciones interesadas en llevar adelante un proyecto que presenta ciertas características de tipo regional, en especial para la Patagonia.

Lamentablemente nuestros esfuerzos por hacer fuerte la idea del federalismo de concertación no han dado aún los resultados que esperamos. De todas maneras votaremos favorablemente las modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados en relación con la conformación y atribuciones del Consejo Federal Pesquero pues el hecho mismo de su constitución y la posibilidad de la participación de las provincias marítimas en la toma de decisiones importa en sí mismo un avance sustancial, aunque diste en cuanto a la magnitud del pretendido por nosotros.

Tenemos aún una tercera diferencia, en este caso en cuanto a la técnica legislativa empleada, tanto en el proyecto que aprobara el Senado cuanto a las modificaciones introducidas por la cámara revisora. Nos referimos al régimen de infracciones y sanciones.

Entendemos que hubiese sido preferible tipificar las faltas y establecer puntualmente las sanciones que corresponden ante la comisión de cada una de las infracciones. En el proyecto que tenemos en consideración las infracciones se establecen en forma genérica y las sanciones a aplicar quedan al arbitrio y discreción de la Secretaría de Pesca, según lo establece el artículo 7º inciso h) y el 51 y siguientes.

También, señor presidente, nos preocupa que a último momento la Cámara de Diputados haya quitado del texto de la ley algunos instrumentos, que hubiesen servido para paliar la crisis que vive el sector pesquero y que, o bien estaban en la media sanción del Senado, o bien en el predictamen de la Comisión de Intereses Marítimos de Diputados.

Me refiero expresamente al agregado que sufrió el artículo 40 referido a las tripulaciones, que permite que la reserva de tripulación argentina pueda ser dejada de lado, cuando "se dificulte la operatoria normal de los buques pesqueros". Una frase que por su amplitud permitirá las más diversas interpretaciones.

Señor presidente, insistiremos en la sanción del artículo 42 de la redacción original, pues implica para las provincias con litoral marítimo la posibilidad de intervenir en la capacitación y formación del personal embarcado de la pesca, como del personal científico y técnico relacionado con la actividad pesquera.

Finalmente, señor presidente, anticipo que nuestro bloque votará favorablemente las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados; con excepción de los artículos 3º y 5º para los que solicitaremos la insistencia del Senado en la redacción original, lo mismo que respecto de los artículos 42 y 65 del proyecto original porque entendemos que esta ley es, además de regulatoria de la actividad pesquera, fundamentalmente proteccionista del recurso natural en explotación, que por su calidad de renovable, es particularmente sensible a sufrir graves alteraciones biológicas que pueden llevarlo a su completa extinción.

Debido a este peligro, su explotación comercial se debe realizar en un marco de estricta planificación y control, a fin de preservar su sustentabilidad en el tiempo.

Señor presidente, debo destacar que mi condición de patagónico hace que mi preocupación por la cuestión sea aún mayor.

La actividad pesquera se encuentra mayoritariamente radicada en la Patagonia, debido a que la posición geográfica de la pesca ha ido desplazándose paulatinamente hacia esta región, lo que también trajo como consecuencia, un cambio en las modalidades de pesca, con una fuerte incorporación de buques factorías y una consecuente tendencia a la disminución de las plantas en tierra.

La actividad ocupa en las provincias de la región, aproximadamente a veinte mil personas en forma directa y afecta indirectamente a unas cuarenta mil más.

La ley prevé el fortalecimiento de políticas tendientes a incorporar mayor valor agregado a los productos pesqueros, y tomar en consideración para el otorgamiento de permisos de pesca las instalaciones de procesamiento radicadas en el territorio nacional.

El proyecto establece políticas para incorporar los conocimientos científicos y técnicos que van generando los organismos de investigación y que constituyen una base sólida para introducir rápidas modificaciones en los planes pesqueros, a la luz de la nueva información.

También se procura evitar mediante una planificación adecuada de la actividad, que factores económico-financieros coyunturales distorsionen los programas de explotación y comprometan el futuro pesquero del país.

Preservando el recurso, podremos preservar las fuentes de trabajo y el crecimiento económico de la región patagónica a partir de una explotación biológicamente sustentable.

A efectos de revertir esta situación de crisis, recuperar los niveles poblacionales anteriores, evitar la pesca furtiva, la depredación y el uso de artes y equipos de pesca destructivos, así como la violación de las vedas, los reglamentos y el falseamiento de la información, la ley establece sanciones para los infractores, las que, si fuesen rigurosamente aplicadas, permitirán la preservación de la población ictícola, para usufructo de las generaciones presentes y futuras.

Para concluir señor presidente, el recurso ictícola constituye una de las tantas riquezas con que está dotado nuestro país, por eso mismo debemos aprovecharlo de la manera más racional y eficiente posible.

Por los motivos precedentemente señalados, es que el bloque de la Unión Cívica Radical votará por la aprobación de las modificaciones introducidas.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Ulloa.** — Señor presidente: quiero expresar mi posición favorable a este proyecto de ley, que entiendo es muy importante.

Solamente deseo formular una advertencia: probablemente tenga que ser corregido en el futuro por alguna ley complementaria. La Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar establece la jurisdicción sobre los recursos sedentarios. Se trata de los recursos que están sobre el suelo, en la plataforma continental, más allá de las 200 millas.

En este aspecto, tenemos una contradicción con la Convención aprobada por ley por nuestro país sobre el derecho en el mar. De manera que quiero simplemente dejar establecida esta advertencia.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra la señora senadora por Santa Cruz.

**Sra. Fernández de Kirchner.** — Yo no he pedido la palabra, señor presidente.

**Sr. Presidente (Menem).** — Fue un error de la Secretaría, señora senadora.

Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Cantarero.** — Que se vote por capítulos, señor presidente.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se va a votar de otra forma. La estructura de este proyecto es distinta de la del proyecto anterior, señor senador.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en particular, porque en general ya ha sido aprobado. Y, como se insiste en algunos artículos, se va a votar de acuerdo con la estructura que tiene

el dictamen de comisión, conforme lo lea el señor secretario parlamentario.

**Sr. Secretario (Piuzzi).** — Inciso a): (Lee). "Insistir en la redacción de los artículos 3º y 5º conforme fueran sancionados por el Honorable Senado de la Nación".

**Sr. Presidente (Menem).** — Ruego a todos los señores senadores indicar el voto porque se necesitan mayorías especiales para la insistencia.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Ha resultado aprobado por unanimidad.

**Sr. Secretario (Piuzzi).** — Inciso b): (Lee). "Aceptar las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados a los restantes artículos del proyecto".

**Sr. Presidente (Menem).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Secretario (Piuzzi).** — Inciso c) —y último—: (Lee). "Insistir en la sanción de los artículos 42 y 65 del proyecto original de este cuerpo, los que se incorporarán con los números 73 y 74 al texto ordenado que se acompaña por separado".

**Sr. Presidente (Menem).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— El artículo 75 es de forma.

**Sr. Presidente (Menem).** — Los tres puntos han sido aprobados por unanimidad.

Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.<sup>1</sup>

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las inserciones solicitadas por los señores senadores.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Quedan aprobadas las inserciones.<sup>1</sup>

### 39

#### **PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL TABAQUISMO**

**Sr. Presidente (Menem).** — Corresponde considerar el dictamen en el proyecto de ley en revisión sobre modificación del Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el Tabaquismo.

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.